

Propuesta de resolución:

Antecedentes de hecho

Recurso de alzada interpuesto por el MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES contra la sanción impuesta en el expediente gubernativo seguido como pieza separada 01 en el procedimiento 439/2023 sobre impugnación de actos administrativos seguido ante el Juzgado de lo Social n.º Siete de Las Palmas de Gran Canaria por la que se impuso un multa de 300 euros diarios por haber puesto de manifiesto una actitud rebelde en el cumplimiento de los requerimientos efectuados de acuerdo a la normativa que menciona en el auto de fecha 18 de marzo de 2024, y hasta que se aportara el expediente requerido en legal forma debidamente foliado, con índice y en formato OCR.

Dicha multa quedó sin efecto por providencia de fecha 5 de abril de 2024 que daba cuenta del de la presentación del expediente requerido.

Fundamentación

Primero.- Lo que de un modo fundamental se trata de atajar al poner en manos de los tribunales un arma disuasoria tan importante como la imposición de multa coercitiva por actuación temeraria y mala fe procesal es la manipulación y tergiversación de las normas procesales para la obtención de una posición de ventaja respecto de los demás litigantes, ganada injustamente mediando abuso, engaño o fraude.

Por otra parte, la buena fe procesal se configura como la necesaria acomodación de las conductas a los principios éticos exigidos por la conciencia social y jurídica. Si bien la misma se puede ver seriamente comprometida en casos de ocultación de información, de adopción de iniciativas claramente dilatorias o al ir flagrantemente contra los actos propios, sin descartar la posibilidad de que sea susceptible de atentar contra la misma una demanda o una oposición temerarias, no parece que ello sea predicable respecto del supuesto que nos ocupa.

Establece el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que tuvo en cuenta el Magistrado que impuso la sanción, lo siguiente:

1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones.
2. Quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales.
3. Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal.

4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa.

De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas.

5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente, a la aplicación de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior.

Segundo.- La buena fe es un concepto metajurídico, que al ser elevado a principio informador de las normas jurídicas y de las actuaciones judiciales en sentido amplio, hace transparente el fondo ético del derecho, y en el supuesto de autos, desde un punto de vista de la ética jurídica y procesal, la actuación del letrado merece la sanción y el reproche recurrido.

La administración recurrente recurrente fundamenta su recurso en síntesis, en la ausencia del tramite de audiencia y en la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta ya que se atendió el requerimiento el día 29 de septiembre de 2023 aunque no fuera en el formato requerido, lo que aconteció con posterioridad.

En cuanto al primero de los motivos, falta de tramite de audiencia ha de ser rechazado el mismo ya que dicho tramite fue cumplido por medio del recurso de reposición que se interpuso contra el auto de fecha 18 de marzo de 2024 por el que se le impuso la sanción, ya que como preceptúa el artículo transcrito anteriormente, aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia y que la audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa. Precisamente el recurso de reposición y ahora el de alzada articulan el tramite de audiencia que se dice conculcado.

Por lo que respecta al segundo de los motivos de recurso, la proporcionalidad de la sanción, de las actuaciones obrantes se advierte que a la fecha de la imposición de la sanción el día 18 de marzo de 2024, la demandada había sido requerida hasta en tres ocasiones sin aportar el expediente en la forma legalmente exigible (con índice, foliado y en OCR) por lo que trascurrieron más de seis meses desde el primer requerimiento el día 12 de septiembre de 2023, dictándose nuevo

requerimiento por diligencia de ordenación el 15 de enero de 2024, suspendiéndose los actos de conciliación y en su caso juicio señalados para el día 16 de enero de 2024, y señalándose nuevamente vista para el día 29 de febrero donde nuevamente se puso de manifiesto la falta de aportación del expediente. Resulta llamativo que la recurrente nunca diese explicación alguna sobre la falta de cumplimiento del requerimiento, alegando exceso de trabajo, acumulación de tareas o algún problema técnico.

Se entiende por tanto a la vista de lo expuesto, tiempo transcurrido sin atender el requerimiento en el formato adecuado, consecuencias para el proceso y falta de alegaciones justificativas de dicho incumplimiento, proporcionada la sanción impuesta.

Procede por tanto la desestimación del recurso.

Propuesta de Acuerdo:

DESESTIMAR el recurso interpuesto por MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES contra la sanción impuesta en el expediente gubernativo seguido como pieza separada 01 en el procedimiento 439/2023 seguido ante el Juzgado de lo Social n.º Siete de Las Palmas de Gran Canaria por la que se impuso una multa de 300 euros diarios hasta la aportación de determinada documental.

Las Palmas de Gran Canaria a 8 de mayo de 2024.

José Antonio Morales Mateo